

*Andrés González Martín*

Relación entre conflicto y  
posconflicto: Colombia y los  
acuerdos de paz

## Relación entre conflicto y posconflicto: Colombia y los acuerdos de paz

### Resumen

La guerra civil de Colombia es la más antigua de América. Una guerra sin fin para varias generaciones de colombianos, en la que han muerto más de un cuarto de millón de personas y han sido desplazados unos seis millones de sus lugares de origen. El terror han marcado la vida cotidiana de Colombia durante tres cuartos de siglo.

El proceso de paz entre el Gobierno y las FARC, iniciado en 2012, permitió firmar a las partes un acuerdo en Cartagena de Indias el 26 de septiembre de 2016. Sin embargo, ninguna guerra civil termina con el fin del conflicto armado. Rafael Pardo, ministro colombiano del posconflicto, considera que la paz tardará 15 años en llegar a todo el territorio.

Después de una larga y cruel guerra civil, el conflicto de la memoria perdurará durante mucho tiempo por su carácter político. El conflicto de la memoria generará tensiones porque determinará lo que hay que recordar y lo que es preciso olvidar. La guerra civil se convertirá en un lugar de memoria.

En Colombia el Centro Nacional de la Memoria Histórica tendrá que abordar la difícil tarea de trabajar con los recuerdos de una sociedad marcada por la angustia de una guerra civil. El producto del trabajo de la CNMH determinará en qué medida la memoria histórica exige la refundación de la república, su reforma institucional o su consolidación.

### *Abstract*

*Colombia's civil war is the oldest in America. An endless war for several generations of*

*Colombians, in which more than a quarter of a million people have killed and some six million Colombians have displaced from their homes. Terror has marked the daily life of Colombia for three-quarters of a century.*

*The peace process between the government and the FARC, initiated in 2012, allowed parties to sign an agreement in Cartagena on 26 September 2016. However, no civil war ends with the end of the armed conflict. Rafael Pardo, Colombian minister of post-conflict, believes that peace will take 15 years to reach the entire territory.*

*After a long and cruel civil war, the conflict of memory will remain for a long time because of its political character. Conflict in memory will create tensions because it will determine what needs to remember and what needs to forget. The civil war will become a place of memory.*

*The National Center for Historical Memory will have to tackle the difficult task of working with the memories of a society marked by the anguish of civil war. The product of the work of the CNMH will determine to what extent the historical memory demands the foundation of a new republic, its institutional reform or its consolidation.*

#### Palabras clave

Narco guerrilla, coca, criminalidad, memoria histórica, proceso de paz, posconflicto, Comisión de la Verdad, Centro Nacional de la Memoria Histórica, justicia transicional, jurisdicción especial para la paz, referéndum.

#### Keywords

*Narco guerrilla, coca, crime, historical memory, peace process, post-conflict, Truth Commission, National Center for Historical Memory, Transitional Justice, Special Jurisdiction for Peace, referendum.*

**«Las FARC son un muerto viviente»**

Colombia es un país en permanente guerra civil desde su independencia. La violencia ha sido un mecanismo político utilizado por unos y por otros en la competencia por el ejercicio del poder. Sin necesidad de repasar toda la historia política del país, sí es conveniente hacer algunas consideraciones que nos permitan asomarnos a la complejidad del momento actual.

El antecedente inmediato a la aparición de las FARC en 1964 fue la llamada «violencia», que entre 1948 y 1958 enfrentó a los partidos conservador y liberal causando decenas de miles de muertos y centenares de miles de desplazados. La formación del Frente Nacional en 1957, para poner fin a los enfrentamientos, garantizaba la alternancia en el poder de los dos partidos en conflicto, dejando fuera de la escena política a otras nuevas opciones. La vieja clase política siguió en el poder pero cerrando el camino a la participación de otras corrientes. Por otra parte, no todos los combatientes aceptaron la reconciliación, convirtiéndose en grupos de bandoleros capaces de controlar parte del territorio llegando a constituirse lo que entonces se conocía como repúblicas independientes dentro del territorio colombiano.

Pedro Antonio Marín, más conocido como Manuel Marulanda Vélez o «tirofijo», combatió inicialmente con las milicias liberales durante la «violencia» para terminar formando parte de grupos armados sin control que evolucionarían hacia el comunismo agrario. Marulanda llegó a ser uno de los líderes de la llamada república de Marquetalia, establecida en la cordillera Central dentro del departamento colombiano de Tolima, fuera del control del Estado. Constituyó en 1960 las autodefensas para responder a los intentos del gobierno de recuperar el control de la zona. Después de cuatro años de combates contra el ejército colombiano, Marulanda se convertiría en el primer comandante del bloque sur que se transformaría más tarde en las FARC. Manuel Marulanda, jefe de una milicias liberal que controló una de las llamadas repúblicas independientes a principios de los años 60, terminaría siendo el primer comandante de las FARC, milicia de carácter marxista leninista, hasta su muerte en el año 2008.

Los ochenta años de vida de Manuel Marulanda están marcados por la lucha política violenta, primero como liberal, luego como comunista. Muchos de los guerrilleros de las FARC han tenido la misma experiencia vital, algunos hoy son nietos de antiguos combatientes. Por el camino han pasado muchas cosas, entre otras la caída del muro y

el descrédito del comunismo en todo el mundo, incluso en los Estados que todavía se presentan como repúblicas populares de inspiración marxista. Hoy ser comunista es solo una forma distinta de hacer negocios.

La guerrilla colombiana hace mucho tiempo que dejó de ser lo que fue y lo que fueron tantas y tantas guerrillas iberoamericanas. Las FARC dejaron de ser un movimiento insurgente marxista leninista en los años noventa para convertirse poco a poco en el mayor cartel de la droga del mundo. La metamorfosis se hizo sin cambiar de nombre y sin renunciar a la cobertura ideológica marxista que le permitía justificarse e incluso mantener la simpatía de muchos nostálgicos de los viejos buenos tiempos de juventud, cuando el sueño de la revolución comunista parecía estar al alcance de la mano. Las FARC dejaron de ser, hace mucho tiempo, una guerrilla, que pretendía liberar a la nación de la opresión de una dictadura militar o de una oligarquía, para convertirse en algo diferente. Las FARC son una narco guerrilla que ha controlado durante más de 25 años parte del territorio colombiano.

Colombia desde hace mucho tiempo y desde luego desde la constitución de 1991 es una república democrática. El artículo primero de su constitución dice que «Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general».

Por lo tanto, las FARC no es un anacrónico residuo de la Guerra Fría sostenido por la injusticia de un régimen represor que niega los derechos políticos y sociales a los ciudadanos para sostener los intereses de una clase privilegiada. Las Fuerzas Armadas colombianas son una institución sometidas al control político y que actúan en defensa de la legalidad de la República de Colombia combatiendo a diferentes grupos criminales, que sostenidos por los inmensos recursos que proporciona el negocio del narcotráfico controlan parte del territorio de la República.

Los crímenes contra los miembros de Unión Patriótica, movimiento político en el que participaba el Partido Comunista Colombiano, durante la década de los ochenta son un capítulo más, importante sin duda, de la historia de violencia en el país. En aquellos años cerca de 3.000 militantes de UP fueron asesinados por los paramilitares y los narcotraficantes. Esa etapa de persecución criminal de los líderes comunistas se acabó. Más adelante, el Partido Comunista Colombiano se integró en la coalición

Alternativa Democrática que posteriormente formaría parte del Polo Democrático Alternativo hasta el año 2012, cuando entraría a formar parte de Marcha Patriótica. Como en la mayoría de las democracias, los partidos comunistas han tenido que integrarse en coaliciones de izquierda para esconder su nombre y su bandera de la hoz y el martillo para participar en la vida política del país.

El diccionario de la Real Academia Española define narcoguerrilla como guerrilla que se financia con el tráfico de drogas. La definición del diccionario es demasiado escueta para comprender del fenómeno narcoguerrillero. El volumen de negocio que mueve la droga es tan grande como para poder desbordar la función, que inicialmente pudo tener, de financiar a un grupo insurgente, alterando la propia naturaleza de lo que en su momento fue movimiento revolucionario. La mutación de un movimiento armado de lucha política en una narcoguerrilla está relacionada con la corrupción de las personas y de las ideas, aunque también se ha visto favorecida porque la causa que justificó en su día la lucha armada ha sido completamente desacreditada y porque el entorno político ha evolucionado lo suficiente para permitir la libre participación, concurrencia y competencia pacífica de las diferentes opciones políticas. Las FARC son un muerto viviente que mata todo lo que está vivo a su alrededor para sumarlo al grupo de los zombis.

El negocio de la droga es tan rentable como para corromper incluso a los viejos comunistas. Desgraciadamente muchos jóvenes colombianos podrían hacer suya la frases de Ray Liotta en «Uno de los nuestros» cuando al principio de la película dice «que yo recuerde, desde que tuve uso de razón, siempre quise ser un gánster».

### **«Si el sol alumbra a todos, justicia es libertad»**

La guerra civil de Colombia es la más antigua de América y la más sangrienta, estamos hablando de una guerra sin fin para varias generaciones de colombianos. Una guerra de una violencia y crueldad extrema, donde han muerto más de un cuarto de millón de personas, han sido desplazados unos seis millones de colombianos de sus lugares de origen, muchos han tenido que huir del país y miles de personas han sido secuestradas, donde la extorsión, la coacción y el terror han marcado la vida cotidiana del país durante tres cuartos de siglo. Esta realidad personal y colectiva no puede de repente terminar de asimilarse y superarse por sus protagonistas solamente con la firma de un acuerdo entre las partes, especialmente si una de ellas se ha transformado

en el mayor cartel de la coca del mundo y la otra ha actuado desde el poder sin buscar los suficientes apoyos políticos en la oposición democrática.

Las excesivas expectativas generadas por el presidente Manuel Santos con la firma del acuerdo de paz con las FARC en septiembre de 2016 y la propia dinámica del llamado proceso de paz pueden ser un lastre para la construcción de un futuro sin violencia. El posacuerdo y el posconflicto serán necesariamente largos, duros y difíciles, supondrán un ajuste y reconfiguración de la sociedad colombiana, de sus percepciones, de su memoria y de su propia identidad.

El ministro colombiano del posconflicto Rafael Pardo señaló en una entrevista al diario *El País* que el proceso no se desarrollará simultáneamente en todo el territorio y que en el campo tardaría 15 años en terminarse completamente<sup>1</sup>. El ministro con sus palabras reconoce que no puede construirse la paz, después de tanta guerra, bajo la presión de las prisas de un calendario electoral y de las oscilantes preferencias de la opinión pública que desde mucho antes de lo esperado ha entrado en campaña electoral. Históricamente, los debates sobre las propuestas electorales solían comenzar un año antes de la elección presidencial. Sin embargo, la firma del acuerdo de paz con las FARC y las tensiones generadas por este proceso, han adelantado los debates de las próximas elecciones presidenciales<sup>2</sup>. En la próxima campaña, donde el proceso de paz será uno de los más relevantes asuntos, un elemento que distorsiona y complica más el panorama político es la corrupción, que afecta tanto al partido del presidente Santos como al del ex presidente Uribe. Los escándalos políticos, relacionados con los sobornos pagados a miembros de estos partidos por la empresa brasileña Odebrecht, serán un tema que desgaste a los candidatos de los dos partidos que compitieron por la presidencia en la segunda vuelta en las pasadas elecciones del 2014.

Anunciar que la paz ha germinado puede ser prematuro y generar frustración porque desgraciadamente solo es la proyección de un deseo que no se corresponde con la realidad. Con dificultad, la paz solo podrá construirse con mucho tiempo y esfuerzo por delante. En los 281 municipios controlados por la FARC o el ELN en 2012, cuando comenzaron las negociaciones en La Habana, se produjeron 4.114 asesinatos; en 2016 cuando se firma el alto el fuego y el acuerdo de paz se han producido 3.157 y 61

<sup>1</sup> [http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/10/actualidad/1489185466\\_568331.html](http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/10/actualidad/1489185466_568331.html).

«Hay desplazamiento, hay asesinato de líderes sociales, hay situaciones de seguridad que hay que controlar. Pero es un proceso, no se puede pretender que todo ocurra en todas partes el mismo mes. Por eso se plantean 15 años de transformación de la vida rural».

<sup>2</sup> <http://www.semana.com/nacion/articulo/candidatos-presidenciales-2018/513532>.

secuestros, que desde luego no son pocos. En toda Colombia en 2012 se produjeron 15.957 asesinatos, que en 2016 se han reducido a 12.262<sup>3</sup>. Un país con más de doce mil asesinatos al año no es un país en paz. Sin embargo, la Fundación Paz y Reconciliación recoge estos datos en un informe de abril de 2017 que se titula «una increíble cifra de reducción de la violencia».

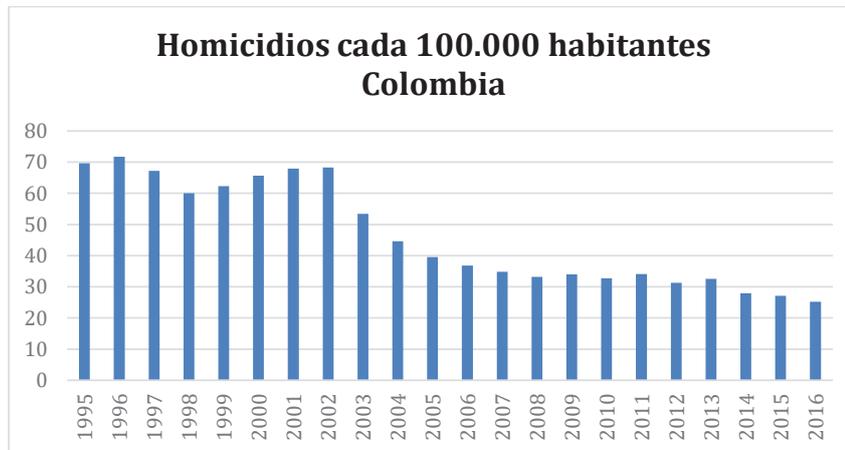
La desmovilización de las FARC no supone el fin de la violencia. Durante los últimos 27 años la violencia se ha reducido en el país, logrando disminuir significativamente su tasa de homicidios. Hoy Colombia ha salido de la listas de los diez países con una tasa de homicidios más alta del mundo. La firma de los acuerdos de paz con las FARC ha consolidado esta tendencia, pero el país sigue triplicando el promedio mundial y superando la alta tasa de violencia de Iberoamérica. La reducción de la criminalidad del futuro no está garantizada.

Colombia se enfrenta ahora a una reconfiguración de las nuevas violencias durante el posconflicto. El año 2016, alrededor de 33 colombianos fueron asesinados cada día, con una tasa de 25,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Iberoamérica continúa siendo la región más violenta del mundo, con el 8% de la población, concentra el 34% de las muertes a nivel global. Y la carga de asesinatos que aporta Colombia sigue siendo muy alta: 12.262 muertes violentas en 2016, que solo superaron México y Brasil<sup>4</sup>.

A los altos niveles de violencia se une la impunidad de los crímenes. Según las estimaciones de la Fiscalía General para el año 2016 se prevé que solo dos de cada 10 asesinatos en Colombia terminen resolviéndose con una condena.

<sup>3</sup> <http://www.pares.com.co/paz-y-posconflicto/una-increible-cifra-de-reduccion-de-la-violencia/>.

<sup>4</sup> <http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1498>.



<http://datos.bancomundial.org>

No es descartable que igual que el desarme y desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia supuso la aparición de bandas criminales que ocuparon el espacio y los negocios ilícitos de estas milicias, ahora con la transformación de las FARC en un partido político pueda pasar lo mismo. En Colombia, el Estado no ha estado nunca presente de la misma manera en todos los departamentos y la desaparición de las FARC no cambiará de forma inmediata esta realidad. Los acuerdos de paz no terminarán con la violencia en todo el territorio colombiano mientras el Estado no pueda disponer de los recursos suficientes para hacer efectiva su acción. La producción de cocaína en 2015 y 2016 son más altas que las de los años noventa. Desde el inicio del proceso de paz el número de hectáreas dedicadas a la producción de coca se han multiplicado.

En marzo de 2017 International Narcotics Control Strategy Report, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos de América, estimaba que la producción potencial de cocaína pura en Colombia se había incrementado en 2015 un 60% respecto al año anterior, con un incremento del 42 por ciento del número de hectáreas dedicadas al cultivo de coca. Las cifras que aporta el informe son escandalosas, 160.000 hectáreas de suelo colombiano se dedican al cultivo de coca, algo menos que toda la provincia de Guipúzcoa. Los datos presentados en marzo de 2017 por la Office of National Drug Control Policy de Estados Unidos de América estiman que en 2016 siguió incrementándose el número de hectáreas dedicadas a este cultivo llegando a las 188.000, lo que supondría un 18% en más en un año.

Los datos de UN Office on Drugs and Crime (UNDOC) se mueven en la misma dirección, fijando un incremento potencial de producción de cocaína en Colombia

durante 2015 del 46% respecto al año anterior. Cuando en 1999 se aprobó el plan Colombia por los presidentes Andrés Pastrana y Clinton se estimaba que en Colombia se cultivaban 170.000 hectáreas de coca. Entonces este dato invitaba a muchos a considerar a Colombia un estado fallido. Cuando en el año 2012 comenzó el proceso de paz en Colombia se cultivaban 48.000 hectáreas de coca<sup>5</sup>. El plan Colombia había sido un éxito con una reducción del 71 por ciento de los cultivos. Durante los cuatro años que ha durado el proceso de paz las áreas de cultivo han crecido llegando en 2016 a casi 190.000 hectáreas. Los extraordinarios resultados de 12 años de trabajo para erradicar los cultivos del plan Colombia se han esfumado durante los cuatro años de conversaciones con las FARC. Se estima que en la actualidad hay más de 3.500 bandas criminales (BACRIM) en Colombia dedicadas al negocio de la droga.

*Jane's International Review*, en un artículo publicado en abril de 2017 titulado «Cocaine trade expands into new markets», señala que las FARC desde 2012 ha estimulado el cultivo de coca en las zonas bajo su control, concluyendo que su desmovilización no supondrá una reducción de la producción sino todo lo contrario porque el Estado no podrá controlar los territorios y la demanda mundial está creciendo. Los datos nos hablan de correlación entre la producción de coca y las negociaciones de paz pero el análisis de *Jane's* habla de causalidad. La misma causalidad es resaltada por el expresidente Alvaro Uribe en una entrevista en la que señala que:

«En 2012, el país había bajado a 47.000 hectáreas de coca. Tal y como veníamos trabajando, el narcotráfico era acabable»<sup>6</sup>.

Los acuerdos de paz, al considerar el narcotráfico un delito político, por ser las FARC el cartel de cocaína más grande del mundo, sin duda han favorecido durante el proceso el incentivo de la guerrilla por ampliar, mientras pudiera, la producción de coca sabiendo que al final no habría castigo. Por otra parte las FARC han estimulado el cultivo de coca entre los agricultores de las zonas que controla para de esta manera vincular los intereses económicos de la población de estas zonas a la no presencia del Estado. Ningún productor de coca quiere que los acuerdos de paz abran las puertas al estado de derecho, tampoco los traficantes, ni por supuesto sus familias. Zonas enteras del país se opondrán con uñas y dientes a la República porque su vida es la coca.

<sup>5</sup> <http://elnodo.co/coca2015>.

<sup>6</sup> <http://www.alvarouribevelez.com.co/es/content/alvaro-uribe-la-paz-con-las-farc-no-puede-poner-en-riesgo-la-democracia>.

Según los datos del proyecto de UNDOC (United Nations Office on Drugs and Crime) en Colombia, denominado Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), se estima que 74.000 familias, más de 300.000 personas, están vinculadas al cultivo de coca. Las comunidades de plantadores de coca de Caño Indio en el municipio de Tibú, fronterizo con Venezuela en el departamento colombiano de Santander Norte, al entrevistarse con las autoridades del Gobierno, que trataban de implantar proyectos alternativos de erradicación de los cultivos ilícitos, dejaron clara su postura al responder que «sin coca no hay paz». En el municipio de Tumaco situado en el departamento de Nariño en la frontera con Ecuador, donde el 88% de la población es afrocolombiana, los representantes de la comunidad negra afirman respecto al cultivo de coca que «sembramos esta planta para el sostenimiento de nuestras familias, ya que los cultivos lícitos no nos dan para nada». Tres kilos de coca generan 400 veces más ingresos que 50 kilos de maíz<sup>7</sup>. Para la población de las zonas productoras, sin coca no hay paz. Los acuerdos de paz firmados con las FARC obligan al Estado a negociar y concertar los planes de sustitución con las comunidades y a proporcionar durante el primer año a los cultivadores y sus familias, dinero en efectivo, mercados y asistencia<sup>8</sup>. Lo cierto es que en la práctica todos los ensayos de sustitución de cultivos y «desarrollo alternativo» que ha intentado el país durante los últimos 30 años han fracasado, entre otras razones porque las FARC y los demás actores del narcotráfico controlan milimétricamente la vida, la actividad y los negocios en los cultivos y porque no existe ningún producto que pueda aportar a los campesinos los ingresos que les dan la coca<sup>9</sup>. Frente a estas opiniones, los políticos no ven las cosas de la misma manera. En el mes de marzo en una sesión especial ante la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, reunida en Viena, el ministro colombiano para el posconflicto, Rafael Pardo, afirmó que es necesario reducir sustancialmente el número de hectáreas de cultivos ilícitos en el país para lograr la consolidación de la paz en el país, señalando que: «Tanto el Gobierno de Colombia como las FARC entienden, que mientras exista esa área de cultivos de coca la paz no va a ser sostenible». Para el Gobierno nacional, declaró el ministro Rafael Pardo que «la paz sostenible significa reducir sustancialmente el área cultivada en hoja de coca. Mientras exista una

<sup>7</sup> <http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/la-coca-y-la-paz/16764687/1/>.

<sup>8</sup> <http://www.semana.com/opinion/articulo/german-manga-con-200-mil-hectareas-de-coca-no-hay-paz-posible/499936>.

<sup>9</sup> <http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/la-coca-y-la-paz/16764687/1/>.

mata de coca, alguien va a comprar las hojas, alguien va a procesarlas en cocaína y ese alguien es parte de un grupo ilegal o de una mafia»<sup>10</sup>. La principal amenaza para la paz en Colombia ahora se llama coca. Hasta ahora el 60% de la coca que entraba en Estados Unidos procedía de las FARC<sup>11</sup>. Este gran negocio no se sabe quién terminará heredándolo.

Henry Hill en la película «Uno de los nuestros» lo explicaba a su manera. «Para nosotros vivir de otra manera era impensable, la gente honrada que se mataba en trabajos de mierda por unos sueldos de miseria, iba a trabajar en metro cada día y pagaba sus facturas, estaba muerta, eran unos gilipollas, no tenían agallas. Si nosotros queríamos algo lo cogíamos y si alguien se quejaba dos veces le dábamos tal paliza que jamás volvía a quejarse, era una simple rutina, ni siquiera lo pensábamos».

La cocaína se introduce en el Caribe desde Colombia, a través de países como Venezuela, Guyana, Trinidad y Tobago, curiosamente solo con Venezuela tiene frontera Colombia. Las remesas son transportadas hacia el norte, a través de las islas, por viajeros y correos o usando pequeños barcos pesqueros, cruceros y embarcaciones de vela, en ocasiones se efectúan traslados clandestinos de un barco a otro en el mar o se utilizan aerolíneas comerciales y contenedores marítimos de carga<sup>12</sup>. Venezuela aparece en el centro como país de tránsito.

Hay muchos datos y hechos que confirman la implicación de autoridades venezolanas de alto rango político y militar en acciones de contrabando de cocaína. Estados Unidos ha acusado recientemente al vicepresidente venezolano Tareck El Aissami y a su colaborador José López Bello de estar implicados en el tráfico de drogas. Este tipo de acusaciones no son nuevas, en el año 2008, durante el mandato de Hugo Chávez, Estados Unidos había implicado en actividades relacionadas con el narcotráfico al jefe de la inteligencia militar venezolana, el general Hugo Carvajal, al general Henry Rangel y al entonces ministro del Interior Ramón Rodríguez Chacín. En el año 2016 fueron acusados de narcotráfico los generales Néstor Luis Reverol y José Molina. Las sospechas también han llegado al entorno de la familia del presidente Maduro, cuando dos sobrinos de su mujer Cilia Flores fueron detenidos por las autoridades norteamericanas acusados de transportar 800 kilos de cocaína.

<sup>10</sup>[http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/10/actualidad/1489185466\\_568331.html](http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/10/actualidad/1489185466_568331.html),  
[http://caracol.com.co/radio/2017/03/13/nacional/1489419591\\_711376.html](http://caracol.com.co/radio/2017/03/13/nacional/1489419591_711376.html).

<sup>11</sup> <https://www.foreignaffairs.com/articles/colombia/2016-10-05/colombias-failed-peace>.

<sup>12</sup> [http://www.unodc.org/documents/colombia/2017/Marzo/JIFE2016/AR\\_2016\\_S.pdf](http://www.unodc.org/documents/colombia/2017/Marzo/JIFE2016/AR_2016_S.pdf).

El control de las fronteras colombianas es un elemento de singular relevancia. La difícil orografía del país y la selva complican el control de los flujos comerciales, que en muchos casos son ilícitos y relacionados con el narcotráfico, financiando el negocio de bandas criminales, que para mantener su forma de hacer negocios necesitan controlar el territorio y la población. Sin un control efectivo de las fronteras el narcotráfico y el contrabando seguirán alimentando la violencia, que en este caso puede no ser de carácter político pero sí instrumentalizada por grupos políticos. Precisamente la mayor concentración de actividad de las FARC se ha venido produciendo en los departamentos fronterizos con Venezuela y Ecuador.

Este problema no es exclusivamente colombiano. Brasil con 16.000 kilómetros de frontera selvática se enfrenta a los mismos desafíos. Se calcula que el 90% de la violencia que sufre Brasil proviene del tráfico de drogas, armas, contrabando y prostitución pasando casi todo ello por las difíciles e inmensas fronteras brasileñas. Brasil no produce droga, toda llega ilegalmente del exterior, sobre todo de Bolivia<sup>13</sup>.

El Gobierno brasileño decidió en 2009 duplicar el número de pelotones de vigilancia en las regiones fronterizas de la selva amazónica, en el marco del proyecto «Amazonia Protegida». Los pelotones de vigilancia son unidades militares con competencias policiales y también focos de desarrollo de la zona. Donde no puede llegar de forma permanente el resto de instituciones del Estado, las Fuerzas Armadas de Brasil destaca a su ejército para prestar todo tipo de servicios, sanitarios, educativos, policiales, etc. Las familias de los militares que viven en la frontera son en muchos casos la única población estable de inmensas áreas del territorio.

El Gobierno de Dilma Rousseff más adelante decidió hacer una inversión millonaria para la creación del Sistema integrado de vigilancia de las fronteras (Sisfron). El nuevo sistema incluye radares de imagen y de comunicación de diferentes grados de sofisticación, vehículos aéreos no tripulados y blindados para la frontera terrestre con foco en la Amazonia.

En el caso de Colombia, también un elemento esencial para reducir la violencia y los delitos es un más efectivo control de sus fronteras. El modelo brasileño podría ser un buen ejemplo. Además es posible que algunos elementos guerrilleros sigan dispuestos a mantener la lucha. El gobernador del estado venezolano de Amazonas, Liborio Guarulla, ha alertado de la presencia de unos 4.000 guerrilleros de las FARC, que

---

<sup>13</sup> [http://internacional.elpais.com/internacional/2011/01/09/actualidad/1294527609\\_850215.html](http://internacional.elpais.com/internacional/2011/01/09/actualidad/1294527609_850215.html)

controlan varias minas de oro en el territorio de su estado. El gobernador denunció que el Ministerio de Defensa de Venezuela tiene conocimiento de esta situación y no ha hecho nada<sup>14</sup>. Precisamente en la zona colombiana de la frontera con el estado venezolano de Amazonas operaba el bloque oriental, posteriormente denominado bloque Jorge Briceño.

El bloque oriental ha sido durante mucho tiempo el más activo de las FARC.

Posiblemente las cifras citadas de guerrilleros en Venezuela sean excesivas pero, en cualquier caso, puede haber algún tipo de incumplimiento de los acuerdos por grupos que no aceptan las condiciones impuestas por la negociación y que se apuntan al *business as usual*. El gobierno venezolano a través de la Contraloría General de la República, a principio de mayo de 2017, decidió no solo cesar a Liborio Guarulla como gobernador del estado de Amazonas sino también imponerle la sanción de inhabilitación durante 15 años<sup>15</sup>.

Durante los meses de abril y mayo de 2017 las Fuerzas Armadas colombianas han desmantelado varios depósitos secretos de armas de las FARC, que escondían fusiles de guerra, granadas, municiones, explosivos, detonadores, ametralladoras, lanzadores de granadas, minas terrestres y granadas de mortero. Los portavoces del Ejército han declarado que las armas han sido utilizadas para extorsionar a los equipos encargados de la erradicación de los cultivos de coca<sup>16</sup>. Mientras oficialmente las FARC se desarman en las zonas previstas el Ejército descubre almacenes secretos de armas, lo que supone un quebrantamiento de los acuerdos de paz.

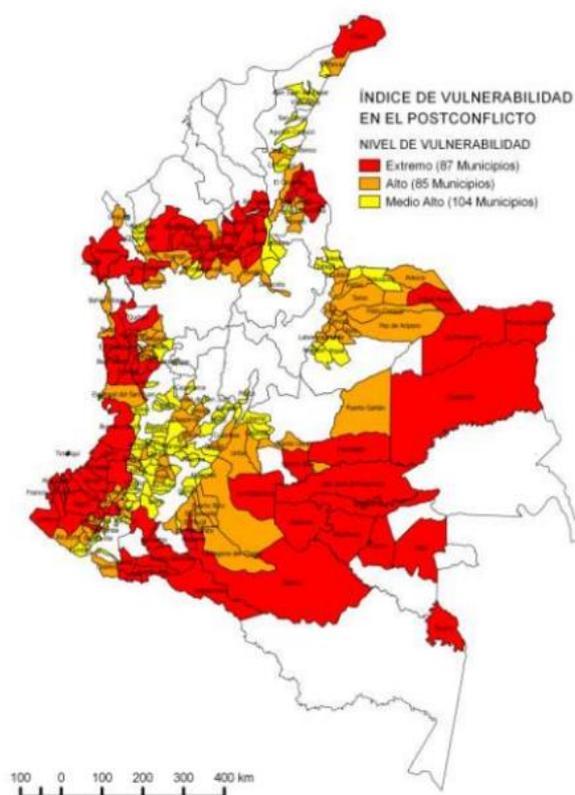
De las catorce regiones con presencia de las FARC en 2015, once tienen una presencia importante de economías ilegales. Economías que se han sostenido con cultivos ilícitos, minería ilegal o impuestos revolucionarios. La Fundación Paz y Reconciliación clasificó en tres categorías a los 281 municipios controlados por las guerrillas en función de la probabilidad de que nuevamente surjan grupos armados ilegales en estos territorios capaces de reproducir la violencia después de la entrega de las armas por parte de las FARC. En color rojo aparecen los más vulnerables, en naranja los intermedios y en amarillo los menos vulnerables. El resultado final presenta un mapa lleno de color rojo. Los resultados de este análisis realizado de 2015 no son

<sup>14</sup>[http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/secuestro-helicoptero-por-guerrilla-entrega-soberania\\_79831](http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/secuestro-helicoptero-por-guerrilla-entrega-soberania_79831).

<sup>15</sup> <http://infocidad24.com/contraloria-inhabilito-al-gobernador-liborio-guarulla-15-anos/>.

<sup>16</sup> <https://www.wsj.com/articles/colombias-perilous-deal-with-the-farc-1494187574?tesla=y>.

alentadores pero lo curioso es que el informe ha desaparecido de la página de la fundación, que considera que el llamado posconflicto durará 10 años<sup>17</sup>.



Las FARC en 2012 estaban militarmente derrotadas, su entidad se había reducido y muchos de sus principales comandantes habían huido a Cuba o Venezuela. En esta situación tiene sentido abrir conversaciones secretas pero no lo tiene tanto convertir a las FARC en uno de los protagonistas de un proceso de paz. Unas negociaciones secretas del Estado con la narcoguerrilla pueden terminar o no, en función del

<sup>17</sup> <https://www.las2orillas.co/los-281-municipios-donde-las-farc-el-eln-estan-presentes-hace-30-anos/>.

resultado de las conversaciones entre las partes, con la desmovilización y desarme de la organización criminal, para abrir un posterior proceso de normalización y reinserción. Un proceso de paz en la plaza pública establece una secuencia que, necesariamente para no fracasar, tiene que terminar con un acuerdo y una foto según un calendario político. Las negociaciones secretas permiten al Estado mantener la iniciativa y elegir, mientras que un proceso de paz como el iniciado en 2012, no tanto.

En repetidas ocasiones, se ha dicho que las FARC no se disolverían si su futuro era la cárcel pero no se ha dicho que el acuerdo de paz se tendría que firmar en 2016 si el presidente Manuel Santos y su partido aspiraban a seguir teniendo futuro. Era fundamental firmar el acuerdo en 2016 para llegar a las elecciones de agosto de 2018 con posibilidades de ganar otra vez y sobre todo ganar el juicio y el aplauso de la historia. El calendario electoral fija el calendario de inauguración de las obras públicas en muchas democracias pero no es lo mismo construir una autopista que construir la convivencia nacional.

En una guerra civil prolongada de naturaleza irregular el final no llega con la victoria de una de las partes en una gran batalla decisiva, tampoco solo con un acuerdo de los líderes. La paciencia aquí es la clave porque la paz solo se alcanzará con la acumulación de silenciosos éxitos y la orquestación de todos los elementos de poder nacional e internacional.

La virtud de la paciencia no está de moda en una sociedad posmoderna sometida al imperio de lo efímero. Aceptando que el posconflicto pueda durar 10 o 15 años y que la violencia se mantenga en gran parte de los 281 municipios que hasta ahora contralaba la guerrilla, la gestión de las expectativas es importante porque un optimismo excesivo puede tener un alto coste político. Las palabras del presidente Santos en su discurso del 26 de septiembre, en el acto de firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto con las FARC, anticipan un escenario bien intencionado.

«Han sido casi 70 años de violencia política, desde el magnicidio de Gaitán, desde cuando los colombianos nos enfrentábamos siguiendo una bandera roja o una bandera azul. Hoy, al firmar el acuerdo de terminación del conflicto con las FARC, decimos esperanzados:

Ha sido un surco de dolores, de víctimas, de muertes, pero hemos logrado levantarnos sobre él para decir: ¡El bien germina ya! ¡La paz germina ya!

Hoy Colombia y la comunidad internacional —representada por sus más altos dignatarios— saludan el acuerdo de paz como la mejor noticia en medio de un mundo convulsionado por la guerra, los conflictos, la intolerancia y el terrorismo».

¡El bien germina ya! ¡La paz germina ya! Son estrofas del himno nacional de Colombia utilizadas por el presidente Santos en su discurso, que se olvidó de seguir glosando el himno completo y llegar a su parte final que dice:

Mas no es completa gloria vencer en la batalla,  
que al brazo que combate lo anima la verdad.  
La independencia sola al gran clamor no acalla;  
si el sol alumbra a todos, justicia es libertad.

### **Ninguna guerra civil termina con el fin de las hostilidades**

Ninguna guerra civil termina con el fin de las hostilidades. La reconciliación nacional puede necesitar varias generaciones, quizá más de cien años. Cuanto más dura, larga y cruel haya sido la guerra más tiempo necesita la nación para hacer justa memoria de lo sucedido. La guerra civil norteamericana terminó con la rendición del general confederado Robert Lee en Appomattox el 9 de abril de 1865. El general Lee perdió la ciudadanía norteamericana por su papel en la guerra civil. Robert Lee intentó recuperar su nacionalidad, la ciudadanía y sus derechos civiles solicitando la amnistía al presidente de Estados Unidos Andrew Johnson pero este rechazó su solicitud. Tendrían que pasar 110 años para que el congreso de Estados Unidos restituyera en 1975 la ciudadanía a Robert Lee.

La gobernadora del estado de Carolina del Sur Nikki Halley en 2015 se manifestó en contra de que la bandera confederada ondease en el capitolio de ese estado. Esta bandera se colocó en 1961 en memoria de los caídos en la guerra y para muchos de los ciudadanos de Carolina del Sur es un recuerdo de sus ancestros. La bandera confederada sigue siendo un símbolo del mal para muchos norteamericanos después de 150 años del fin de la guerra civil pero para otros sigue siendo un símbolo de identidad, que no necesariamente tiene relación con la causa de la confederación. En siete estados de Estados Unidos su bandera actual recuerda símbolos de la confederación, en la bandera del estado de Misisipí aparece expresamente la famosa *Stars and Bars* bajo la que combatieron los soldados del sur. La violencia racial no es

un problema del pasado en Estados Unidos, a pesar de todo lo que se ha hecho durante más de un siglo para la completa integración legal y real de la población negra. Los símbolos de la guerra civil para algunos siguen recordando la causa esclavista.

Después de una larga y cruel guerra civil, el conflicto de la memoria perdurará durante mucho tiempo porque su esencia es política. Este conflicto de la memoria generará tensión y puede que violencia, porque de lo que se trata es, nada más y nada menos, que de definir los recuerdos del pasado que son legítimos y cuáles no, determinando lo que hay que recordar y lo que es preciso olvidar. Memoria y olvido son dos caras de una misma moneda. En un escenario donde el Estado no controla gran parte del territorio suficientemente y donde la violencia y el crimen tienen espacio para actuar con impunidad, la batalla por la memoria será más dura y larga.

En Colombia el Centro Nacional de la Memoria Histórica tendrá que abordar la difícil tarea de trabajar con los recuerdos de una sociedad marcada por la angustia de una interminable guerra civil. El producto de su trabajo será el soporte sobre el que se fundamentará los límites de la acción política dentro del cauce institucional. El producto de la CNMH determinará en qué medida la nueva memoria histórica exige la refundación de la república, su reforma institucional o su consolidación. El resultado del trabajo de la CNMH no será un juicio histórico pero sí un juicio político de los distintos actores en el largo conflicto colombiano, ayudando a los colombianos a acumular pruebas y argumentos sobre los que construir su futuro, condenando, comprendiendo o justificando a las partes y por lo tanto recolocando a todos de cara al nuevo papel que puedan desempeñar no solo durante el posconflicto sino durante la paz que pueda estar por venir.

La «Ley de víctimas y restitución de tierras» tiene entre sus objetivos la constitución del Centro de la Memoria Histórica para «contribuir a la realización de la reparación integral y el derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto, así como, al deber de memoria del Estado con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano, en un horizonte de construcción de paz, democratización y reconciliación»<sup>18</sup>.

El artículo 143 de la Ley de Víctimas dice que «en ningún caso las instituciones del Estado podrán impulsar o promover ejercicios orientados a la construcción de una

---

<sup>18</sup> <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/somos-cnmh/que-es-el-centro-nacional-de-memoria-historica>.

historia o verdad oficial que niegue, vulnere o restrinja los principios de pluralidad, participación, solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento». Este artículo ha servido para fundamentar el rechazo de algunos grupos a la inclusión del Ministerio de Defensa en el Consejo Directivo del CNMH, conforme a lo dispuesto en el Decreto 502 del 27 de marzo de 2017, con el cual el Gobierno modificó la composición del Consejo Directivo del CNMH<sup>19</sup>.

El director general del CNMH, Gonzalo Sánchez y su equipo, se han pronunciado al respecto, señalando que «seguirá promoviendo la pluralidad de la memoria y la centralidad de las víctimas en su construcción». Por ello, acoge y respalda la iniciativa recientemente expresada por diversas organizaciones para que se amplíe la participación de las víctimas en el Consejo Directivo del CNMH. «Seguiremos promoviendo la autonomía del trabajo de esclarecimiento y dignificación de las víctimas, crucial para la construcción de una sociedad en paz».

La pluralidad de la memoria será difícil de administrar porque no se trata de una memoria individual de las víctimas solamente, sino la base de una memoria política colectiva, que reúne lo vivido y recordado por el conjunto de las víctimas. El heterogéneo conjunto de memorias individuales se tendrá que integrar y no podrá ser una suma de todas las aportaciones por su dispersión y volumen. El trabajo de homogeneización de las aportaciones personales del pasado está relacionado con la capacidad integradora del grupo de las víctimas y no parece que esta capacidad sea suficiente para construir un todo armonioso y válido para todas las partes. Será por eso muy difícil, por no decir imposible, evitar la instrumentalización política, que puede ser negativa desde el punto de vista histórico pero necesario desde el punto de vista de la convivencia democrática.

La memoria es por esencia y lo será, una lucha política y veremos cómo muchos grupos de todo tipo pretenden imponer sus recuerdos. No todas las memorias colectivas valen lo mismo para el futuro de Colombia. La equidistancia en la memoria no permitirá cerrar el conflicto y al final podemos encontrarnos con que la sociedad pueda estancarse en una enfermedad crónica de la memoria, por no poder olvidar lo que no conviene recordar. Una memoria incompleta puede ser la única memoria que pueda sanar aunque tenga un componente no histórico sino políticamente pedagógico.

---

<sup>19</sup> <http://colombia2020.elespectador.com/opinion/la-batalla-por-la-memoria-del-ministerio-de-defensa>.

La oposición entre historia y memoria tiene su fundamento en la visión que una y otra tiene del pasado. Para la historia, el pasado está muerto. Para la memoria, el pasado es lo que ya no es y lo que todavía es<sup>20</sup>. La memoria histórica es una instrumentalización que puede ser dirigida hacia la reconciliación o hacia el retorno permanente al enfrentamiento. Por lo tanto, la memoria puede ser un producto que permita gestionar el orden o promover el desorden político y social.

La artesanía de la memoria histórica, es decir su manipulación, es fruto de la aceleración de la historia, que provoca una ruptura del equilibrio, anulando la experiencia y vivencia de una civilización transmitida poco a poco a un pueblo. En la continuidad de la experiencia y en la vivencia transmitida, en este legado, es donde se acumulaba la continuidad de la percepción del hombre, de sus relaciones, de la vida, del bien y del mal, de lo verdadero, de lo valioso, de lo ontológico, de lo trascendente. La aceleración de la historia provoca un desgarramiento de lo que todavía había de vivido en el calor de la tradición, en la costumbre, en la persistencia de lo ancestral aglutinado todo ello bajo el empuje de un sentimiento histórico de fondo. La ruptura de la continuidad de las experiencias y vivencias de una civilización impide el acceso a la conciencia de sí bajo el signo de lo construido en el pasado por los que nos han precedido. La consistencia de un saber acumulado desde el principio se desvanece. José Ortega y Gasset anunciaba este peligro en su libro *La historia como sistema*:

«Romper la continuidad con el pasado, querer empezar de nuevo, es denigrar al hombre y plagiar al orangután. Fue un francés, Dupont-White, quien alrededor de 1860 se atrevió a exclamar: la continuidad es un derecho del hombre, es un homenaje a todo aquello que lo distingue de la bestia».

Para Ortega la historia no es una miscelánea de hechos aislados ni una suma de acontecimientos, sino un orden de realidad superior que permite entender unos y otros. La pérdida de este orden de realidad introduce la crisis del hombre que rompe con el pasado solo para recuperar lo que en su momento le desgarró para encarnarlo en lugares de memoria «donde el sentimiento de continuidad se vuelve residual»<sup>21</sup>.

La pérdida de la continuidad es el triunfo de la discontinuidad revolucionaria, que destruye la realidad porque no puede comprenderla. La pérdida de la continuidad impone la necesidad de volver a buscar un origen, donde existe una indistinción, donde

<sup>20</sup> MICHONNEAU, Stephane. «La memoria ¿Objeto de la historia?» Universidad de Valencia. 2008.

<sup>21</sup> NORA, Pierre. *Les lieux de Mémoire*. Traducción profesor Fernando Jucamar. Universidad Nacional de Comahue. *La République*. París, Gallimard. 1984.

no se diferencia lo posible de lo imposible. Todos los deseos se realizan, se han realizado ya. El origen es el paraíso del cumplimiento, donde existe una adecuación absoluta entre el deseo y su objeto. Fuera de toda consideración filosófica, «el origen no es una causa inteligible». Colombia con su CNMH no puede pensar en un nuevo comienzo, en un mito originario que surge de la firma de un acuerdo de paz. La historia continua y los colombianos tienen que advertir lo indeseable de su propia experiencia y, por lo mismo, el deseo de equilibrio como irrealizable.

La no aceptación de los límites y de los errores es la vuelta permanente al origen que exige una manipulación continua de la memoria vivida para ser sustituida por una memoria permanente en construcción.

La memoria se convierte entonces en un espacio de combate para imponer el propio origen y desde allí apuntar al final. Desde esta consideración lo importante no es responder a la pregunta ¿Quién he sido? Ni siquiera responder a la pregunta ¿Quién soy? Lo importante es responder a la pregunta ¿Quién seré? Evidentemente el relato político de la memoria tiene que mantener la continuidad en el tiempo y la coherencia, por eso el primer capítulo que hay que escribir es el último y desde allí los demás.

El primero de los objetivos estratégicos del CNMH es:

La comprensión social del conflicto armado. Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición<sup>22</sup>.

La finalidad es contribuir a la verdad de las víctimas y garantizar la no repetición. Este es el último capítulo, el primero en ser escrito. Indudablemente hay un componente político pedagógico en este objetivo. Pierre Nora uno de los más destacados historiadores franceses modernos puso en circulación el concepto de lugar de memoria. Un lugar de la memoria es un conjunto conformado por una realidad histórica y otra simbólica. Según Nora, cuando un personaje, un lugar o un hecho se constituyen como lugar de la memoria es que se está desentrañando su verdad simbólica más allá de su realidad histórica. Se trata de constituir un conjunto simbólico y advertir la lógica

---

<sup>22</sup><http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/somos-cnmh/que-es-el-centro-nacional-de-memoria-historica>.

que las reúne<sup>23</sup>. La CNMH tiene como misión hacer del conflicto colombiano un lugar de memoria. La CNMH se transforma en un taller encargado de producir la memoria colectiva de Colombia, elaborando una visión colectiva del pasado pero sin dejar de pensar en la no repetición.

En este caso es evidente que el pasado no puede separarse del lugar donde se fabrica, del taller. «La memoria es un lugar de recreación, que por definición es artificial, cultural y socialmente determinado. El protagonismo recae en el proceso de rememorización que es el corazón de la reconstrucción de la memoria»<sup>24</sup>.

El proceso es el corazón de la reconstrucción de la memoria por eso la relevancia de la tarea de la CNMH y por eso tienen sentido las sospechas que han generado la modificación de su composición con la aprobación de su decreto de estructura.

La Comisión de la Verdad tampoco tendrá fácil cumplir con sus funciones: contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, promover y contribuir al reconocimiento y promover la convivencia en los territorios. Ante este reto, Poncio Pilatos se hubiera encogido de hombros diciendo ¿y que es la verdad? Si la memoria es plural, la verdad en un conflicto, que suele ser la primera víctima, también es plural. La cuestión de la verdad por lo tanto no solo está relacionada con los hechos sino con el sentido de los hechos y su juicio político. Sería absurdo pretender reconocer a todos como víctimas, negando a todos la condición de victimarios. Tampoco serviría para mucho reconocer a todas las víctimas solo como víctimas. Al final el presente del futuro hará una valoración del sentido del dolor y de ahí una categorización de las víctimas.

Al disolverse las FARC sus mandos son conscientes de la importancia de la «verdad» y de la «cultura» que se diseñen para el futuro. Pablo Catatumbo, que fue comandante del bloque occidental de las FARC y uno de los más duros líderes del movimiento guerrillero, en una entrevista señalaba que:

«La Comisión de la Verdad es una oportunidad enorme para una nación en la que históricamente ha regido la impunidad y en la que deberán converger todos los relatos y todas las visiones en pos de una verdad que sea realmente sanadora y emancipadora. Esta guerra fue terrible. Aquí casi todo está por conocerse».

<sup>23</sup> <https://historiaymemoria.wordpress.com/2010/11/05/sobre-los-lugares-de-la-memoria/>.

<sup>24</sup> MICHONNEAU, Stéphane. «La memoria ¿Objeto de la historia?» Universidad de Valencia. 2008.

Creo que Pablo Catatumbo tiene mucha razón: casi todo está por conocerse, pero si nos perdemos en el intento vano de conocerlo todo, es posible que no conozcamos lo que de verdad importa para el futuro.

Los principios fundacionales del partido político de las FARC, que resaltan la necesidad de crear «un bloque popular alternativo», señala en su punto 22 el papel central de la cultura. Las FARC afirman que: «se está frente a la perspectiva de emprender la transformación cultural más importante de la historia reciente: la construcción de una paz estable y duradera de cara a las generaciones futuras».

El resultado de la batalla por la memoria, la cultura política y por la verdad es la que determinará al final el relato originario de una nueva Colombia en paz. Finalmente será la memoria, la cultura política y la verdad que se proyecten y que se perciban las que prevalecerán. Los medios de comunicación y los intelectuales tienen un papel que jugar relevante en medio de la confusión que aparecerá en la multiplicidad de memorias individuales, culturas políticas y verdades particulares que entrarán en liza.

### **El cansancio de la guerra**

El presidente Santos en su discurso el 26 de septiembre de 2016 en Cartagena afirmaba: «lo que firmamos hoy es una declaración del pueblo colombiano ante el mundo de que nos cansamos de la guerra, de que no aceptamos la violencia como medio para defender las ideas; de que decimos –fuerte y claro–: ¡No más guerra!».

Muy pocas guerras son tan cortas e indoloras para no cansar. En el caso de Colombia más de 70 años de guerra son demasiados. La paz como acontecimiento ofrece muchas posibilidades. Realmente ninguna paz es igual a las demás. Muchas paces son posibles y no todas valen lo mismo. Algunas son más simpáticas que otras y desgraciadamente las hay verdaderamente monstruosas. Ahora bien, quien coloca la ausencia de violencia siempre por encima de cualquier otro principio está destruyendo toda capacidad de resistencia frente a las paces que asustan solo con imaginarlas.

Justicia es libertad, canta el himno de Colombia en su penúltima estrofa. El concepto de libertad reclama, por su misma esencia, un complemento que le proporcionan lo justo y lo bueno. La libertad sin el bien y sin la justicia puede anularse a sí misma para convertirse en una realidad vacía que abre la puerta del nihilismo. En esta situación es necesario tener presente que el Estado tiene la obligación de mantener la convivencia humana en orden, creando un equilibrio entre libertad, justicia y bien común.

El eslogan de ¡no más guerra! es muy arriesgado, supone aceptar la bondad de cualquier ausencia de violencia, adoptando irremediamente una política de apaciguamiento frente a un adversario que puede seguir dispuesto a mantener abierto un conflicto que cuestiona los principios básicos de convivencia en una democracia.

Pablo Catatumbo en la entrevista antes citada decía que «el fin de la guerra no es el fin del conflicto social, pero sí el fin de la guerra»<sup>25</sup>. Estas palabras anuncian algo conocido en Europa y que se denomina estrategia desarmada, practicada inicialmente por el IRA y posteriormente copiada por ETA. Es aparentemente un cambio en los modos y medios pero no en los fines. En cualquier caso, tanto los herederos políticos de ETA como del IRA han utilizado el recuerdo del miedo generado por la violencia política para intentar y con frecuencia conseguir remodelar el panorama político según sus preferencias.

Una estrategia desarmada que permita que la violencia ilegítima de bandas criminales, terroristas o guerrilleras permanezca latente en la sociedad, condicionando el ejercicio de los derechos individuales y las libertades públicas de los ciudadanos y dirigiendo la construcción de la memoria, es una estratagema que pervierte cualquier proceso de paz. Si la pasividad de muchos en los tiempos de violencia política y criminal se justificaba por el miedo, ahora se justifica por el interés o sencillamente por la indiferencia. Las víctimas pueden terminar sufriendo primero la violencia, luego el olvido y finalmente la silenciosa exclusión. Situación que nos recuerda la cita de Miguel de Unamuno: «no nos mata la oscuridad, sino la indiferencia».

La violencia en Colombia puede aparecer de nuevo no como una lucha directa contra el Estado para tomar el poder o ejercerlo en algunas partes del territorio sino a través de actos aislados, terroristas, subversivos o simplemente criminales, que sin desafiar la continuidad del Estado, sí afectan a las decisiones políticas y a la vida de la comunidad nacional. Las acciones violentas de baja intensidad o directamente terroristas o criminales buscarán presionar a los decisores, que se encuentran atrapados por el imperativo de la paz a toda costa. De esta manera, el atentado terrorista o la violencia callejera serán presentados como un fracaso político del Estado democrático, por su incapacidad para integrar a una parte de la sociedad que justifica y utiliza la violencia

---

<sup>25</sup><http://colombia2020.elespectador.com/pais/no-le-tengamos-miedo-la-verdad-que-la-verdad-sana-pablo-catatumbo>.

sin ser responsable de sus crímenes. Este escenario no es imposible en un país donde al año siguen muriendo más de 12.000 personas por actos violentos.

Violencia y justicia, guerra y derecho no siempre están en oposición. Hay una violencia legítima que existe por ser inherente al propio derecho que defiende sus fundamentos y sus resoluciones. Pero fuera de la ley y el derecho la violencia es ilegítima y deslegitimadora si no termina, más pronto que tarde, convirtiendo la fuerza en poder y el poder en derecho para permitir transformar la obediencia en deber. La diferencia hay que explicarla. Una guerrilla con 50 años de historia sin duda es una prueba de la incapacidad política de sus líderes por buscar acomodo a su fuerza en un orden legal, especialmente después de la aprobación de la constitución de 1991. Las FARC han perdido la guerra pero quizá el presidente Santos no tenga asimilada la necesidad de que su Gobierno demuestre al mundo y sobre todo a los colombianos que el agresor era el otro.

Después de la Primera Guerra Mundial, tan importante como la victoria militar es demostrar la superioridad de la causa del vencedor. Después de la gran guerra es fundamental dejar claro quién es el agresor, quién es el culpable de todo el horror de la guerra.

Desde el punto de vista de los rebeldes violentos, la violencia es una forma de comunicación estratégica con el Gobierno, las instituciones, la sociedad en su conjunto y la historia, también una forma de dominio pero subsidiaria. El impacto de sus acciones criminales tiene rápida proyección nacional e internacional, convirtiendo a los rebeldes en noticia, sus demandas en problemas y sus razones en tema de debate. Es evidente que una de las intenciones de la subversión con sus crímenes es captar la atención de los medios de comunicación para publicitar su causa y hacer presente su discurso, destacando con la violencia la gravedad, la urgencia y necesidad de atender prioritariamente sus exigencias.

Los medios de comunicación social en las sociedades democráticas se han convertido en multiplicadores y amplificadores de las noticias, incorporando, desgraciadamente en muchas ocasiones, a la agenda política las cuestiones planteadas por los criminales. Cuando el gran protagonista de la noticia es el que ejerce la violencia, su relevancia crece inevitablemente, afectando al conjunto de la sociedad y al modelo político. Por eso, cuando los medios se limitan a presentar los hechos, refuerzan los efectos de la violencia.

Sin embargo, cuando los medios de comunicación contraponen al discurso de la violencia el compromiso con las víctimas y la verdad que existe más allá de la confrontación partidista, el terror aparece tal cual es sin ningún revestimiento justificativo ni explicativo. La violencia pretende ser política, social y legítima por la causa, otra cosa es que todos los demás lo acepten así y mucho menos que amolden su agenda, su política informativa, y su propio programa a la vileza de un actor ilegítimo. En este sentido, la peor forma de responder a la violencia, desde una perspectiva democrática, es aceptarla como forma de acción política o social, buscando responder a sus mensajes con argumentos distintos de la simple condena. A los violentos se les debe combatir con medidas policiales, judiciales, legales, económicas, sociales, educativas y movilizándolo a la sociedad y su cultura.

Aceptarlos como interlocutores, reconociéndoles alguna forma de legitimidad, supone convertirlos en protagonistas centrales de las aspiraciones de paz y convivencia propias de cualquier sociedad democrática, olvidando los fundamentos democráticos mismos. La participación directa del presidente de la república y la firma conjunta del jefe del Estado colombiano con el líder guerrillero Rodrigo Londoño de los acuerdos de paz colocan a las dos partes en términos de igualdad. La foto en Cartagena de Indias o en La Habana, con Raúl Castro al fondo, no podrá nunca exhibirse como un triunfo político de la libertad, sean cual sean las consecuencias. Al presidente Manuel Santos le han concedido el Premio Nobel de la Paz pero a su interlocutor no. Hubiera sido imperdonable conceder al comandante de las FARC un honor de esta categoría. Es verdad que algunos premios nobeles de la paz se han concedido a personas que participaron en actos terroristas pero también es verdad que esas personas habían demostrado que aquellos pecados eran cosa del pasado.

Por otra parte, la incorporación directa de los líderes de las FARC a la política en un régimen democrático debilita su coherencia. Mucho más cuando se asignan escaños en el senado y en la cámara de representantes al margen de su participación en los procesos electorales durante dos mandatos. Este es un punto negro que en cualquier parte del mundo democrático provocaría escándalo y que en ningún caso puede considerarse modélico para futuros acuerdos de paz en la parte del mundo en que nos toca vivir.

El uso y aprovechamiento de la violencia política inhabilita para participar en el juego democrático pero no solo eso, convierte a sus protagonistas en enemigos de los

principios democráticos. Esta situación coloca no solo fuera a los amigos de la violencia sino también enfrente de la vida en libertad.

Otro gran asunto es la amnistía anunciada para todos los miembros de las FARC y la aplicación general de los principios de la justicia transicional desarrollados en la jurisdicción especial para la paz (JEP). Estas decisiones son una losa que pesará siempre sobre el estado de derecho en Colombia. Solo el éxito de la paz podrá mandar al rincón del olvido este atrevimiento. En cualquier caso existe la posibilidad de que la Corte Penal Internacional (CPI) abriese procesos en Colombia, en relación con los graves crímenes para los cuales tiene competencia. En este caso aplicaría las normas sustantivas y procesales que contempla el Tratado de Roma, al margen de lo que diga la legislación nacional. Esta posibilidad anularía la aplicación de la amnistía y de la JEP, a no ser que Colombia se retirase del Tratado de Roma, lo que supondría un claro descrédito para el país.

Unas negociaciones secretas entre las partes hubiesen podido establecer procedimientos a medida para solucionar el futuro de los principales líderes de las FARC, sin equiparar al Estado con un movimiento subversivo conectado al narcotráfico y sin compromisos legislativos nacionales que pueden obligar a intervenir a la Corte Penal Internacional para juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad en Colombia.

El desafío de la narcoguerrilla no ha terminado todavía con la victoria del Estado, sino con una negociación y acuerdo entre iguales. La situación creada no permite al Estado apuntarse en su haber una reafirmación del principio de legalidad y de los valores que la sustenta. No sería desacertado del todo señalar que el resultado es un pacto con los alzados en armas para «refundar la Patria». El ex presidente Uribe denunció que era necesario corregir lo negociado con duras acusaciones.

«Insistimos en correctivos para que haya respeto a la Constitución, no sustitución; justicia, no derogación de las instituciones; pluralismo político sin que pueda percibirse como premio al delito; política social sin poner en riesgo la empresa honorable»<sup>26</sup>.

La guerra puede terminar con una victoria, con una derrota o con una negociación, pero la lógica de la ley no tiene tantas opciones. Las resoluciones de los tribunales no se negocian fuera del ámbito judicial ni tampoco dentro. Este panorama, que coloca a unos pocos en estado de guerra y a la mayoría comprometida con el respeto a la ley,

<sup>26</sup> <http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37537845>.

ofrece muchas más líneas de acción a los violentos que al Estado. Los sublevados en armas tienen más opciones porque cualquier negociación es una victoria para la lógica de la guerra y una derrota para la lógica de la ley. La negociación es una victoria para la lógica de la guerra, no solo por lo que supone de conquista ilegítima sino, sobre todo, por lo que supone de reconocimiento y de validación. El Estado cede porque es débil o bien porque no tiene más remedio que reconocer sus incoherencias, lo que supone reconocer de alguna manera la justicia de la causa de la violencia.

Si los violentos no son derrotados, el soporte ético de la vida social queda puesto en cuestión, sea por debilidad o por inconsistencia. Al pactar con los violentos quizá, desde luego no es probable, podremos celebrar en su momento los setenta años de paz, entendiendo la paz exclusivamente como ausencia de violencia y no como un orden de libertad, de justicia y de convivencia. Desgraciadamente este tipo de paz nos impediría sentirnos orgullosos de haber vivido setenta años de libertad. Algunas propuestas de paz son incompatibles con la dignidad y terminarán siendo insoportables.

En cualquier caso, es muy probable que lo que desde fuera se entiende como una política errática, que no ofrece seguridades, puede ser una respuesta a los grupos de presión internos. El resultado ha sido que a diferencia de la acción de la justicia, que marca los límites en la relación con la legalidad, se ha impuesto la acción política, más propensa a imponer prescripciones discrecionales, que en algunos casos se transforman en un ultimátum porque los hechos consumados pesan mucho. La inesperada victoria del no en el referéndum no deja de ser un elemento más que se ha pasado por alto en un proceso que tenía que terminar por obtener resultados tangibles dentro de un calendario político ajustado a los intereses de los protagonistas internos y externos. Quizá no sea una casualidad que el mandato del presidente Obama precisamente terminase en enero de 2017 y que las próximas elecciones presidenciales en Colombia sean en 2018 con la FARC desarmadas.

Desgraciadamente son muchos, aquí y allá, los que saben cuáles son los efectos de la violencia por propia experiencia. Han aprendido unos practicándola, otros sufriendola y algunos de las dos formas. Pero al final, cuando de lo que se trata es de empezar un nuevo capítulo de la historia, lo importante no es lo que se conoce de la violencia, lo verdaderamente trascendente es cómo se la enjuicia.

Un juicio genera una actitud personal y social frente a lo que se juzga. La tibia indiferencia es una actitud posible cuando nada relevante está en litigio pero cuando lo que está en juego es la esencia de la propia convivencia, la indiferencia es una forma de despreciarla. Reconocer la posibilidad de que la violencia genere derechos políticos y sociales no es reflejo de prudencia sino posiblemente, en el mejor de los casos, de escepticismo. Llegar tan lejos refleja el cansancio de la voluntad de las gentes que prefieren perder callando, bajando los brazos y aceptando cualquier salida que les permita dejar el pasado atrás. El espacio público no puede estar abierto a la voz de los criminales si el Estado, la sociedad y los ciudadanos creen que una paz justa es la única posible. Aceptar el relato que justifica al violento y la memoria de los que le aplauden tiene consecuencias sobre todas las demás memorias y sobre todos los otros relatos, realmente los inhabilita.

Es verdad que el cansancio de la guerra puede justificar la apuesta por una salida aunque no sea buena. El final a toda costa puede ser consecuencia de la desesperación que puede causar la violencia sin fin. No obstante, a la luz de los resultados del referéndum del 2 de octubre de 2016 descubrimos dos cosas:

Primera: una bajísima participación ciudadana, muy por debajo de los tradicionalmente bajos niveles de participación en las elecciones presidenciales. Una población verdaderamente cansada y desesperada por la guerra hubiera acudido en masa a votar. La cuestión que se trataba era de mucha más relevancia que la elección de un nuevo presidente de la República. Sin embargo, solo acudió a votar el 37,8 por ciento del censo electoral.

Segunda: triunfó el no a los acuerdos de paz. El cansancio de la guerra en la población debería haber impuesto un claro triunfo del sí, sobre todo considerando los fuertes apoyos internacionales e institucionales que recibió la opción del sí. Sin embargo, aunque con pocos votos de por medio, ganó el no.

El dolor aparece inevitablemente cuando es necesario oponerse al discurso de la violencia con las armas de las leyes. Un dolor que afecta tanto al próximo del que agrade como al próximo del que defiende. Pero aunque los dos dolores duelen, no son iguales en términos de valor y sentido. De la misma forma que hay un uso legítimo de la violencia y otro uso ilegítimo, hay un uso político legítimo del dolor y otro ilegítimo. El dolor que fundamenta una política democrática basada en la igual dignidad de todos los hombres y en el respeto a la ley, es un dolor pacificador. Es un dolor con una función